



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL- SALA V

Expte. N° 29571/2022

**“GOLDFARB, DANIEL - TF 47783-I c/ DIRECCION GENERAL
IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”**

Buenos Aires, de marzo de 2025.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Guillermo F. Treacy y Pablo Gallegos Fedriani dijeron:

I.- Que a través de la resolución de fojas 179, la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar al recurso interpuesto por el actor y, en consecuencia: (i) revocó las Resoluciones Nros. 138/16 y 139/16 (DV MRR2) dictadas por la División y Recursos II de la Dirección Regional Microcentro de la AFIP-DGI, por las que se había determinado de oficio la obligación tributaria frente al impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales de los períodos fiscales 2005 y 2006; (ii) impuso las costas a cargo de la demandada; y (iii) reguló los honorarios correspondientes al apoderado y patrocinante de la actora en las sumas de \$320.862 y 802.154, respectivamente, a cargo del Fisco Nacional.

Para así resolver, recordó que la fiscalización tuvo su origen a partir “[...] de la información proporcionada por la Dirección General de Finanzas Públicas de la República Francesa en el marco del Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal, referida a cuentas bancarias en entidades financieras de Suiza, pertenecientes a contribuyentes argentinos, detectándose una cuenta bancaria en la que figuraba el nombre del Dr. Daniel Goldfarb”.

Señaló que las resoluciones determinativas se habían fundado en aquella causal, teniendo por probado el hecho de que el actor sería titular de una cuenta bancaria en el extranjero, con fondos que no habría declarado ante el organismo fiscal. Sin embargo, el Tribunal *a quo* destacó que “[...] no se evidencia de las actuaciones que el Fisco haya indagado siquiera si en los períodos determinados el aquí recurrente tuvo posibilidad alguna de ser el efectivo poseedor del dinero allí indicado [...]”.

A su vez, puso de resalto que en el *sub lite* obraba una copia de la sentencia penal dictada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 11 de esta ciudad, en el marco de la causa N° 1652/2014, caratulada “HSBC Bank Argentina SA y otros s/ infracción Ley 24.769” en la que se había declarado la falta de mérito en relación con el aquí actor respecto de los hecho que se le imputaban. Valoró que, según surgía de allí, al momento de la investigación aquel tenía 25 años, no desarrollaba actividad económica alguna de la que se pudiera inferir que obtuviera una



ganancia de la cuantía que presentaba el saldo de la cuenta bancaria objeto de estudio y que, además, el Sr. Goldfarb carecía de la facultad de firmar individualmente en la cuenta de activos “Los Pottillos Corp.” con la que se lo vinculaba, concluyéndose que no tuvo la disponibilidad de los activos en cuestión.

Destacó que la estructura lógica que debe resultar de una determinación fundada no puede ser arbitraria, ni apoyarse en cualquier indicio, en tanto que el hecho conocido debe estar inequívocamente comprobado por quien intenta articular la presunción, porque de lo contrario la conclusión carece de sustento material. Y concluyó que, en el caso, el juez administrativo había basado la determinación en la información de una entidad bancaria donde el actor no era cotitular de la cuenta, por lo que correspondía revocarla.

II.- Que el Fisco Nacional interpuso un recurso de apelación a fojas 194/196 contra la regulación de honorarios practicada, por considerar elevados los montos allí establecidos.

Por su parte, los letrados de la actora interpusieron un recurso a fojas 200, ya que consideraron escasos los honorarios regulados por el Tribunal Fiscal.

III.- Que contra la decisión de fondo, la parte demandada interpuso un recurso de apelación a fojas 226, y expresó agravios a fojas 234/246, los que fueron replicados por su contraria a fojas 255/256.

En su presentación, el Fisco Nacional se agravió de lo resuelto por el Tribunal Fiscal, hizo un relato de los antecedentes del caso, y manifestó que de la información recabada surgía que el actor, al 31 de diciembre de 2006, poseía una cuenta bancaria no declarada de la Confederación Suiza. Asimismo, señaló que “[...] La sentencia bajo análisis resulta arbitraria, por apartarse de las constancias de la causa [...]”.

Seguidamente, expresó que en la sentencia penal dictada en la causa “HSBC Bank Argentina SA y otros s/ infracción Ley 24.769” se había dictado el procesamiento del Sr. Roberto Jaime Goldfarb en relación al impuesto a las ganancias, al igual que ocurrió con la Sra. Zulema Rotman; y además, que allí se resolvió “[...] la falta de mérito respecto de Daniel y Diego Goldfarb respecto del Impuesto a las Ganancias períodos 2005 y 2006”. Efectuó un relato de los testimonios brindados por el aquí actor en aquella causa, como así también transcripciones de las consideraciones formuladas en el pronunciamiento de ese expediente, y manifestó que, en el caso, la falta de mérito dictada no definía la situación del actor. Por esa razón, consideró que la resolución del Tribunal Fiscal había tenido por





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V

probados hechos en contraposición con la sentencia penal, que -según dijo- “[...] utiliza en su terminología, el potencial [...] no definiendo en ningún caso de manera contundente la apreciación de los hechos”.

Afirmó que “[e]n el procedimiento penal, a la fecha, no se observa una declaración sobre los hechos que definan la necesaria revocación de las resoluciones determinativas de oficio”.

IV.- Que en este estado de las actuaciones, corresponde analizar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

IV.1.- Al respecto, conviene recordar que esta Cámara ha señalado el carácter limitado del recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley N° 11.683, de modo tal que cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (conf. Sala I, in re “Merlino Automotores S.A.”, del 12/03/2009; Sala II, in re “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala IV, in re “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/2010; esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L (TF 31471-I) c/ DGI”, del 6/3/2014, entre otros). Tal principio, sin embargo, puede ceder no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos (esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L”, cit.).

En otras palabras, el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (esta Sala, in re “Amadeo Camogli y Ciminari SC”, del 01/11/2007, entre otros).

IV.2.- En el *sub lite*, para arribar a la resolución que aquí se recurre el Tribunal Fiscal de la Nación fundó su decisión sobre la base de las consideraciones formuladas en la causa penal “HSBC Bank Argentina SA y otros s/ infracción Ley 24.769” antes referida, que obra agregada a fojas 122/151.

Al respecto, puso de resalto que si bien el Fisco Nacional había determinado de oficio los impuestos en trato en relación con el Sr. Daniel Goldfarb por considerar que era titular de una cuenta en el exterior, cuyos fondos no habría declarado al ente recaudador, lo cierto era que en ese penal se había dictado su falta de mérito, al concluir que no era titular de la cuenta, ni poseedor de los fondos allí depositados. Específicamente, el Tribunal *a quo* señaló que el actor tenía 25 años en el año 2005, no poseía CUIT ni estaba inscripto para el ejercicio de ninguna actividad económica, carecía de la facultad de firmar individualmente en la cuenta “Los Potrillos Corp.” con la que se encontró relacionado, y no tenía disponibilidad de los



activos depositados -como sí tuvieron las demás personas involucradas-, circunstancia que “[...] resulta conteste además con su situación patrimonial”.

También, puso de resalto que “[...] las personas que en realidad eran titulares de los activos existentes en las cuentas individualizadas [...] y de la renta generadora del deber de tributar, habrían sido, en lo que resulta de interés a los fines de la presente, Roberto Jaime Goldfarb y Zulma Rotman [...]”, es decir, personas ajenas al accionante.

A partir de tales consideraciones el Tribunal Fiscal revocó las Resoluciones determinativas Nros. 138/16 y 139/16, que se habían fundado exclusivamente en la afirmación de que “[...] el contribuyente poseía en la Confederación Suiza una cuenta patrimonial bajo el Nro de Cliente 5091312936”; que “[...] la aludida cuenta no fue declarada en el impuesto en trato”; y que se había acreditado “[...] la existencia de una cuenta situada en el HSBC Private Bank (Suisse) S.A. cuya titularidad, disponibilidad o manejo de los fondos y/o bienes le es atribuible al contribuyente [...]”.

Es decir, que el Tribunal *a quo* fundó su decisión en función de la prueba valorada y hechos descriptos en sede penal, donde se concluyó que no existían pruebas de que el Sr. Daniel Goldfarb fuera titular de la cuenta extranjera, ni de los fondos que aquella contenía.

IV.3.- De lo expuesto precedentemente se observa que el Tribunal Fiscal analizó las constancias de la causa sin que se advierta irrazonabilidad en la decisión de modo tal que justifique desechar las conclusiones vertidas en el pronunciamiento apelado.

Al respecto, si bien los hechos por los cuales es juzgada una persona en sede penal no obstan para la determinación de su responsabilidad en sede administrativa ya que “[...] el pronunciamiento administrativo es independiente del judicial, en razón de ser distintas las finalidades perseguidas y los bienes jurídicos tutelados en cada uno de ellos [...]” (Fallos: 305:102), lo cierto es que, en el caso, las afirmaciones que surgen del pronunciamiento dictado en la causa “HSBC Bank Argentina SA” antes referida resultan concluyentes en cuanto a que, el aquí actor, no era titular de la cuenta bancaria extranjera -a partir de la cual el Fisco Nacional había dictado las resoluciones determinativas-.

Por su parte, en sus agravios la demandada se limitó a señalar que los hechos descriptos en sede penal no poseían suficiente entidad como para revocar las resoluciones determinativas, pero dicha afirmación de ningún modo logra rebatir las consideraciones del Tribunal *a quo*. Máxime, en tanto ni siquiera se refirió -de forma específica ni genérica- a elementos de prueba que permitan verificar que el Sr. Daniel Goldfarb





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL- SALA V

fuera titular de los activos depositados. Ello, sin perjuicio de que, además, dicha circunstancia se vincula directamente con cuestiones de hecho y prueba, que exceden el carácter limitado del recurso interpuesto ante este Tribunal de alzada.

Por lo expuesto, el agravio del Fisco Nacional debe ser desestimado.

V.- Que en virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución de fojas 179 y, en consecuencia, confirmar lo decidido por el Tribunal en esa oportunidad, con costas a cargo de la parte vencida (art. 68, primer párrafo, del CCCPN).

VI.- Que resuelto lo anterior, corresponde analizar los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios practicada por el *a quo*.

Al respecto, en función de la naturaleza, del resultado obtenido y de la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por los letrados de la parte actora en el proceso, corresponde confirmar la regulación de honorarios practicada a fojas 179 por el Tribunal Fiscal de la Nación, toda vez que resulta ajustada a derecho (conf. Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432 y arts. 16, 20, 21, 25, 44 y 51 de la Ley N° 27.423 y Resolución SGA 3495/2024).

Asimismo, considerando las pautas mencionadas, por la labor desempeñada ante esta Alzada, se fijan los honorarios profesionales de los letrados de la parte actora en la cantidad de 18 UMAs a favor del Dr. Carlos Beraldi -en su carácter de apoderado-, equivalente a la fecha del presente a la suma de \$1.195.848; y en la cantidad de 48 UMAs a favor de la Dra. Valeria D'Alessandro, equivalente a la fecha del presente a la suma de \$3.188.928.

Se aclara que los importes regulados no incluyen suma alguna en concepto de impuesto al valor agregado, el cual deberá adicionarse en caso de que los profesionales acrediten su condición de responsables inscriptos.

VII.- Que por los fundamentos vertidos, corresponde: **1)** Rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada en cuanto al fondo del asunto; **2)** Imponer las costas de esta instancia a cargo de la parte demandada por resultar vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN); **3)** Confirmar la regulación de honorarios practicada a fojas 179 de las



presentes actuaciones; y **4)** Regular los honorarios profesionales correspondientes a los letrados de la actora, por la actuación cumplida en esta instancia, en su carácter de apoderado y patrocinante en la cantidad de 18 y 48 UMAs, respectivamente.

ASÍ VOTAMOS.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:

I.- Que adhiero a la solución propiciada en el voto que antecede en atención a que, de los términos de la sentencia dictada en la causa n° 1652/2014 (2195) “HSBC Bank Argentina S.A. y otros sobre infracción ley 24.769 (legajo de investigación n° 1652/2014/6), del 14 de julio de 2017 resulta que, si bien fue dictada la falta de mérito del contribuyente, allí se concluyó que “...aquel careció de la facultad de firmar individualmente en la cuenta de activos “Los Potrillos Corp”, con la que se encontró relacionado, circunstancia que supone que no habría tenido la disponibilidad de los activos en cuestión –como sí la tuvieron las demás personas vinculadas a aquel perfil-, cabe estimar que aquello se debió a que el nombrado no las habría generado, lo cual resulta conteste además con su situación patrimonial”. Además, se puso de manifiesto que “...en función de la prueba valorada por la presente, cabe estimar que las personas que en realidad eran titulares de los activos existentes en las cuentas individualizadas con las denominaciones de las empresas mencionadas anteriormente y de la renta generadora del deber de tributar, habrían sido, en lo que resulta de interés a los fines de la presente, Roberto Jaime Goldfarb y Zulma Rotman, según el caso”. Agregó que “...en los hechos, quienes manejaban tales fondos –se les fue detallado previamente- pues se encontraban facultados para tomar las decisiones inherentes a la disposición de aquellos, y por lo tanto, se reitera, revestían la condición de sujetos obligados al pago de impuestos”.

Al respecto, y sin perjuicio de las facultades del Tribunal Fiscal en orden a la determinación de la deuda tributaria, una lógica interpretación del artículo 20 de la ley 24.769 no puede llevar a sostener la posibilidad de que se dicten dos sentencias en las que los mismos hechos existan o dejen de existir para los órganos del Estado, que deben atenerse plenamente a las consecuencias de las sentencias dictadas por los tribunales a cuya jurisdicción están sometidos; ni que éstos en buena fe afirmen y nieguen simultáneamente al contribuyente su condición de tal, la materialización de los hechos imponible, o la cuantía de lo que adeuda (cfr. esta Sala, en la causa N° 27.060/06, caratulada “Agroferia SRL (TF 20436-I) c/ D.G.I.”, del 15 de julio de 2008 y causa n° 43.136/2011, caratulada “Scotland SRL (TF 24617-I) c/DGI”, del 27 de junio de 2013, entre otras).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL- SALA V

Por ello es que, lo expresado en la sentencia penal mencionada precedentemente, impide que el Tribunal Fiscal adopte una solución diversa a la allí establecida en atención a que, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, última parte, de la ley 24.769, no es dable apartarse de las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia penal así como tampoco en orden a la materialización del hecho imponible.

Que, como regla, la determinación de los hechos que resulta de la sentencia penal no puede ser desconocida al momento de la determinación de los tributos; y el organismo recaudador no aclara si esa sentencia quedó firme de manera que no es posible calificar la conclusión del Tribunal Fiscal como irrazonable (cfr. Fallos 345:1101).

Por ello, corresponde rechazar el recurso interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada, con costas (artículo 68, primera parte, del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación).

II.- Que, en segundo lugar, y con relación a los recursos de apelación interpuestos respecto de la regulación de honorarios relativa a los letrados de la parte actora y a los que corresponde establecer en favor de aquellos por las actuaciones cumplidas en esta instancia, adhiero a lo expresado en el considerando VI del voto que antecede.

ASÍ VOTO.

En virtud del resultado que informa el Acuerdo que antecede el Tribunal, **RESUELVE: 1)** Rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada en cuanto al fondo del asunto; **2)** Imponer las costas de esta instancia a cargo de la parte demandada por resultar vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN); **3)** Confirmar la regulación de honorarios practicada a fojas 179 de las presentes actuaciones; y **4)** Regular los honorarios profesionales correspondientes a los letrados de la actora, por la actuación cumplida en esta instancia, en su carácter de apoderado y patrocinante en la cantidad de 18 y 48 UMAs, respectivamente.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-

Guillermo F. TREACY

Jorge F. ALEMANY

Pablo GALLEGOS FEDRIANI

Fecha de firma: 18/03/2025

Alta en sistema: 19/03/2025

Firmado por: JORGE ALEMANY, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GUILLERMO FABIO TREACY, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: PABLO GALLEGOS FEDRIANI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: TOMAS BRANDAN, SECRETARIO DE CAMARA



#36617705#447919937#20250318121452805

